Presentación

La sección monográfica de este nuevo número de *Persona y Derecho* está dedicada a un tema crucial para la comprensión de la naturaleza del derecho, las relaciones entre coacción y razón práctica. Se trata además de la cuestión central de la filosofía del derecho contemporánea, que ha sido progresivamente construida en dos direcciones.

Por un lado, la tradición del derecho natural de raíz aristotélico-tomista, también denominada «tradición central de occidente», a la par del movimiento de rehabilitación de la razón práctica en el derecho, confluyen en comprender al derecho como una particular forma de razonamiento práctico-moral o bien, por utilizar la conocida expresión de Alexy, como «un caso especial del discurso práctico general». Se entiende en esta línea que una condición esencial del derecho es su capacidad de crear (nuevas y relevantes) razones (morales/catóricas/perentorias) para la acción, con todo lo que esto lleva consigo.

Por otro lado, la tradición heredera de Hobbes, Bentham y Austin en el *common law* y de la codificación napoleónica en el derecho continental, ha desarrollado la comprensión del derecho como un producto o artefacto institucional del estado moderno. Se asume, en esta línea, una teoría estatista del derecho, según la cual el estado monopoliza el uso legítimo de la fuerza y es la única sede plausible para su justificación.

Esta doble dirección difícilmente produce convergencias en temas y propuestas. Y, sin embargo, en su intersección quizás se juegue la comprensión adecuada del fenómeno jurídico.

El punto de partida de la sección monográfica de este número fue el resurgimiento del debate en torno al rol de la coacción en la comprensión de la naturaleza del derecho positivo, principalmente en el seno de la tradición positivista, como efecto de la publicación en 2015 de la obra de Frederick Schauer, *The Force of Law*. Ésta y otras publicaciones, en efecto, trajeron nuevamente a escena esta cuestión central de la filosofía jurídica, que había quedado opacada

por el protagonismo de la interpretación, argumentación y decisión jurídica, que dominó y domina actualmente la filosofía jurídica, en gran medida como efecto del mencionado «renacimiento de la razón práctica».

En este contexto el resurgimiento del interés académico por el problema del rol específico de la coacción en el derecho supuso una ocasión excepcional tanto para contrastar entre sí las comprensiones clásicas del derecho, como para poner a prueba lo que de alguna forma podría considerarse una tercera vía, la escuela crítica.

Partiendo, en fin, de este resurgimiento, siguió la invitación dirigida a algunos protagonistas del debate contemporáneo sobre el tema indicado. En todos los casos, se les pidió que intentaran responder las preguntas más incómodas que plantea la síntesis entre coacción y razonabilidad, si no como contenido esencial sí, al menos, como aspiración necesaria del derecho. Entre otras, ¿Si una nota esencial del derecho es su capacidad para ofrecer razones para actuar, para qué necesita de la coacción? ¿Hay derecho sin coacción? ¿No es acaso contraintuitivo definir al derecho en función de su contenido, una vez que advertimos que todo derecho positivo es coactivo como cuestión de hecho?

Del lado de la tradición estatalista, las preguntas incómodas son las contrarias. ¿Si el derecho fuera mera regulación del uso de la fuerza, cómo explicamos la indiscutible y *cuasi* universal presencia de principios, y del principio de razonabilidad en particular, en los sistemas jurídicos que el propio positivismo asume como objeto de estudio, esto es, los sistemas jurídicos estaduales?

De los trabajos presentados parece poder deducirse que la filosofía del derecho tiene, al menos, dos desafíos actuales. Por un lado, la teoría analítica de la *jurisprudence*, una vez redimensionado el positivismo, tiene que hacer cuentas con los desarrollos del punto de vista interno o del participante de la práctica jurídica, la principal herencia hartiana, para explicar cómo las normas, comprendidas como razones para actuar «content-independent» pueden ser parte del razonamiento de los juristas. Por otro lado, las teorías del derecho natural y los desarrollos postpositivistas del derecho, que a muy grandes rasgos comprenden al derecho como una práctica argumentativa, tienen que hacer lugar a la regulación institucional de la fuerza, para evitar una comprensión del derecho que acabe reduciéndolo a la deliberación moral del participante.

En todo caso, lo que parece seguro es que el derecho no es meramente un sistema de normas sino una práctica social. Se trata, si se prefiere, de un sistema de normas que regula la conducta en el seno de una práctica social y en

dirección a sus propios fines (o valores). Son ciertamente estos fines valiosos los que justifican el uso de la fuerza dentro de cada práctica jurídica, comenzando por la protección de la libertad individual. No obstante, también nuestra condición humana de vulnerabilidad, interdependencia e intersubjetividad da cuerpo a la necesidad de una fuerza que se imponga sobre la autonomía individual, frente a la posibilidad cierta de no acatar las normas. Es necesario, en fin, evitar lecturas tendencialmente anárquicas del derecho, en las que la libertad justamente protegida no deja espacio alguno para la necesaria e irrenunciable cooperación en torno a la realización y tutela de los fines últimos de la práctica. Es este mismo elemento de cooperación, por otra parte, el que en la era actual de licuación de la soberanía y del monopolio de la coacción estatal inaugura perspectivas teóricas abiertas a concebir formas diferenciadas de derecho, más allá del Estado.

Veronica Rodríguez-Blanco
Isabel Trujillo
Pilar Zambrano